

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, cuatro (04) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: MAURICIO JARAMILLO MERINO
DEMANDADO	: COLPENSIONES.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-005-2022-00225-01
RADICADO INTERNO	: 289-23
DECISIÓN	: MODIFICA, CONDENA, REVOCA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 347

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación y el grado de consulta a favor de Colpensiones, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE que le asiste el derecho a la reliquidación de la prestación económica de pensión de vejez conforme al Ingreso Base de Liquidación promedio de sus últimos diez (10) años de cotización y una tasa de reemplazo de hasta el 80% con 2.106 semanas cotizadas, y se CONDENE a COLPENSIONES a reliquidar la Prestación económica de Pensión de vejez a partir del 22 de octubre de 2021, al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 sobre las sumas de dinero reconocidas por concepto de reliquidación de la pensión de vejez, o subsidiariamente al pago de la Indexación de las condenas por, y se condene a la demandada a las costas del proceso.

Como supuestos facticos manifestó que el señor MAURICIO JARAMILLO MERINO solicitó ante COLPENSIONES el 26 de octubre de 2021 el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo el No. de radicado 2021_12654972, y que mediante la Resolución SUB-75494 del 16 de marzo

de 2022, COLPENSIONES le reconoció la pensión de vejez por un valor de \$ 14.400.726, para el año 2021, con base en un IBL de \$20.426.562, y una tasa de reemplazo del 70.50 %, y que además cuenta con 2.106 semanas.

Que la pensión de vejez fue reconocida y pagada a partir del 22 de octubre de 2021, de conformidad con la Ley 797 de 2003. Luego indica que solicitó el 6 de mayo de 2022 la reliquidación de la pensión de vejez, radicada bajo el No 2022_5845025, sin que para la fecha de presentación de la demanda se haya dado respuesta a la solicitud.

RESPUESTA COLPENSIONES

Esta entidad dio respuesta manifestando que acepta que el señor MAURICIO JARAMILLO MERINO solicitó ante Colpensiones la pensión de vejez la cual fue reconocida mediante la Resolución SUB-75494 del 16 de marzo de 2022 en los términos y cuantías indicados por la parte demandante, así mismo acepta el número de semanas cotizadas que tiene el actor pero indica que si le dio respuesta a la solicitud de reliquidación realizada por este, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones las de inexistencia de obligación de reconocer reliquidación pensional, inexistencia de obligación de indexar las condenas, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas e intereses moratorios de manera simultánea, prescripción, imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 31 de agosto de 2023, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que al señor MAURICIO JARAMILLO MERINO, le asiste el derecho al reajuste de la Pensión de Vejez reconocida mediante Resolución SUB-75494 del 16 de marzo de 2022, con una tasa de reemplazo del 78.44% del Ingreso Base de Liquidación determinado y no del 70.50% determinado que en el acto administrativo, en virtud de lo anterior la mesada pensional reconocida por Colpensiones debió ser de \$16.022.595 y no la reconocida en la mencionada resolución.

CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor MAURICIO JARAMILLO MERINO, la suma de \$43.069.474 por concepto del reajuste pensional liquidado entre el **22 de octubre de 2021 y el 31 de agosto de 2023**, suma sobre la que procede el reconocimiento de intereses de mora

desde el **6 de septiembre de 2022**, esto es 4 meses después de la solicitud realizada en cuanto al reconocimiento de la prestación, hasta el pago efectivo de la obligación.

CONDENÓ a COLPENSIONES a seguir reconociendo y pagando a favor del señor MAURICIO JARAMILLO MERINO, a partir del 01 de septiembre de 2023 la suma de \$19.143.371 mensuales, por concepto de mesada pensional, sin perjuicio de los incrementos de ley y de los descuentos para salud. ABSOLVIÓ a Colpensiones, de las demás pretensiones incoadas en su contra por el señor MAURICIO JARAMILLO MERINO. CONDENÓ en costas a Colpensiones y fijó como agencias en derecho la suma de \$2.153.474.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de Colpensiones interpone recurso de apelación manifestando que conforme al artículo 34 de la ley 100 de 1993, si bien allí se indica que se puede obtener un máximo del 80%, al demandante se le otorgó una tasa de reemplazo del 70.5% siendo la máxima posible teniendo en cuenta la tabla que trae la ley 797 del 2003 de forma decreciente, y que Colpensiones está llamada a aplicar de forma taxativa dicha norma en el tema de la liquidaciones pensionales por lo que indica que la liquidación realizada en la resolución de reconocimiento pensional se encuentra correcta y ajustada a derecho.

Así mismo solicita que la liquidación efectuada en primera instancia sea revisada y se tenga en cuenta todos los argumentos esbozados por Colpensiones en la defensa de la entidad, especialmente los indicados en la resolución de reconocimiento que hacen parte del proceso, y que en caso de que se confirme la sentencia solicita se estudie la posibilidad de modificar el valor de las costas procesales para que dicho valor sea más favorable a Colpensiones, pues indica que dicha entidad aplicó la ley para el caso del demandante en el reconocimiento pensional y no le era posible aplicar una posición jurisprudencial tan reciente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Sin alegatos

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en consulta a favor de Colpensiones y conforme al recurso de apelación interpuesto: i) Si hay lugar

al reajuste pensional solicitado por el demandante, a los intereses moratorios, y si las costas impuestas a Colpensiones deben ser reducidas.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante MAURICIO JARAMILLO MERINO el 26 de octubre de 2021 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez a Colpensiones y la entidad mediante Resolución SUB-75494 del 16 de marzo de 2022, reconoció dicha prestación a partir del 22 de octubre de 2021, en cuantía de \$14.400.726, con base en 2.106 semanas cotizadas, un IBL del \$20.426.562, al que le aplicó una tasa de reemplazo del 70.50%

Que, mediante petición del 06 de mayo de 2022, el demandante MAURICIO JARAMILLO MERINO, solicitó la reliquidación pensional, (fls 27 y ss del PDF 03).

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la liquidación de la pensión de vejez.

Pretende la parte demandante el reajuste de la pensión de vejez aplicando al IBL reconocido por Colpensiones en la SUB-75494 del 16 de marzo de 2022 que corresponde al IBL de los 10 últimos años, una tasa de reemplazo de 80% conforme lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 100 de 1993 por haber cotizado un total de 2.106 semanas

Respecto al tema objeto de estudio establece el artículo 34 de la ley 100 de 1993 lo siguiente:

“ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$r = 65.50 - 0.50 s$, donde:

r = porcentaje del ingreso de liquidación.

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima”.

Para el caso bajo estudio, no hay duda alguna que la prestación reconocida fue liquidada conforme lo estable el artículo 34 de la ley 100 de 1993, modificada por el artículo 10 de la ley 797 de 2003, el cual señala que la tasa de reemplazo corresponde al aplicar la formula $R=65.5-0.5 (s)$.

Ahora, para un mayor análisis, debe explicarse cómo se despeja la fórmula planteada, debiéndose entender que “s” es el número de salario mínimos para el año 2021 (\$908.526) que caben en el IBL \$20.426.562, lo cual arroja un resultado de 22.04, que en principio da una tasa de reemplazo del **56.98%**.

$R=65.5 - 0.50 (\$20.426.562/\$908.526)$

$R= 65.5 - (0.5 * 22.04)$

$R= 65.5 - 11.2$

$R= 54.3\%$

En orden de lo anterior la norma en comentario dispone, que *“A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor*

total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.”

Teniendo en cuenta lo anterior, la norma da posibilidad de incrementar ese porcentaje, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas en un 1.5%.

Así pues, en el presente caso, para el año 2021 como fecha de causación de la pensión, las semanas mínimas requeridas eran 1.300, y el demandante cotizó un total de 2.106 semanas, lo que equivalen a **806 semanas adicionales**; y si dividimos las 806 semanas adicionales entre 50, dan un total de 16¹, que multiplicado por 1.5% arroja un **24%**.

En este sentido, al igual que lo señaló el juez del conocimiento, se puede decir que la tasa de reemplazo sería el resultado de la sumatoria: del **54.3%** (resultado que nos dio la fórmula) + **24%** (resultado de las semanas adicionales), que arroja un porcentaje final del **78.3%**.

Es necesario advertir, que esta Sala del Tribunal era del criterio que cuando se superen las 500 semanas adicionales a las 1.300, es decir, cuando el afiliado cotizaba más de 1.800 semanas, el tope de semanas adicionales que se podía adoptar, no podría superar el **15%**, al señalarse que este valor se extrae de la diferencia que existen entre los montos que trae el artículo 34 de la ley 100 de 1993, ello es, diferencia entre del **65%** al **80%**; no obstante, después de un análisis del estudio de la norma, se recoge tal postura, basándose en los argumentos que a continuación se exponen, y compartiendo lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3501-2022.

Y es que, no puede perderse de vista que el artículo 10° de la ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 34 de la ley 100 de 1993, como límite máximo para la tasa de reemplazo solo impuso el 80 %, “*sin indicar rango alguno de oscilación*”; nótese además que el aparte de dicha norma, que refiere a “*...en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo ...*”, alude a que entre mayor sea el ingreso base de liquidación –IBL-, menor será la tasa de reemplazo. Ello obedece a la fórmula $R=65.5-0.5(s)$, donde se observa que entre más alto sea el IBL, el valor a restar de la fórmula será más elevado,

¹ Esta cifra debe arrojar un número entero, ya que solo se deben tener en cuenta el grupo de 50 semanas adicionales a las mínimas sin proporción alguna.

generando como consecuencia una tasa más baja; no obstante, pretender, además de lo ilustrado, que también se deba limitar la tasa de reemplazo en un máximo de 15 %, se tornaría en una decisión que castigue “...dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna...”

Pretender entonces limitar la tasa de reemplazo en un máximo de 15 % haría ver que el límite máximo del 80 % de que trata la norma en comento, no tenga utilidad alguna. Ello se debe a que la única persona que aparentemente se vería beneficiada de tal porcentaje sería aquella que cuente con un IBL del salario mínimo legal mensual; sin embargo, atendiendo a lo regulado en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, la pensión no se otorgaría con una tasa del 80 %, sino que se reajustaría al mínimo legal.

Asimismo, en la citada sentencia SL3501-2022, frente al límite de la tasa de reemplazo de que trata el artículo 10° de la ley 797 de 2003, señaló:

“Así mismo, la norma también contempla un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% del ingreso base de liquidación, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula indicada, sin embargo, la parte final del mencionado artículo 34 de forma expresa enfatiza en que, “El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación”, pero en este caso, sin indicar rango alguno de oscilación.

Ahora bien, para la Corte lo lógico es, como lo señaló el legislador, calcular el monto inicial de la pensión conforme a la tasa de reemplazo variable en función del nivel de ingresos de cotización, de suerte que, el monto máximo es directamente proporcional al número de cotizaciones adicionales a las mínimas requeridas, es decir, la tasa de reemplazo pende del nivel de ingresos del afiliado y del monto máximo del número de semanas cotizadas; no obstante, las cotizaciones efectuadas a partir del porcentaje máximo del 80% no se computan, ni procede su devolución, en virtud del principio de solidaridad, expresado en ese tope porcentual sobre el límite de salarios mínimos a los que puede llegar el monto de la prestación pensional otorgada por el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, con las reformas y adiciones legales ya enunciadas.

En efecto, la fórmula decreciente estableció que para determinar la tasa de reemplazo se resta a 65.50 los salarios mínimos contenidos en el IBL en cada caso, por tanto, si se vuelve a utilizar ésta para calcular el monto máximo de la pensión, se estaría tomando el nivel de ingresos de cotización para disminuir o castigar dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna, pues con la fórmula se pretende desincentivar el aumento injustificado del ingreso base de cotización, pero en manera alguna limitar el número de semanas necesario para alcanzar el monto máximo de la pensión establecido por la misma norma, salvo la del tope legal ahora vigente de 25 SMMLV.

(...)

Por otro lado, nótese que el incremento de la tasa de reemplazo en un 1.5% del ingreso base de liquidación, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, corresponde a una forma de estimular el trabajo productivo, como valor fundante del Estado Social de Derecho, dado que el trabajo “es ciertamente un derecho humano (Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto o la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad” (CC C-542-1992).

(...)

Ahora, desde la perspectiva de la regulación de la pensión de vejez, la concepción de la idea se basa en que el monto máximo porcentual de la prestación puede ser limitado en un régimen de aseguramiento social, como lo es el contemplado por el Título II, Capítulo I, de la Ley 100 de 1993, definido como un régimen solidario de prestación definida, en el cual los afiliados de mayores ingresos se solidarizan con aquellos de ingresos menores, a través de las aportaciones que realizan en un fondo común de naturaleza pública para garantizar el pago de las pensiones, señalando los montos mínimos y máximos para su reconocimiento, para lo cual el legislador estableció varios mecanismos con la finalidad de evitar pensiones excesivas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema y, de esta manera, contribuir a la búsqueda de la realización de la solidaridad como principio fundamental de la seguridad social contenido en el artículo 48 Constitución Política que, a su vez, fue desarrollado por el literal c) del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, al definirlo como: “la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.

(...)

Lo anterior denota la voluntad del legislador por imponer una mayor base de cotización para los ingresos más altos, pero restringiendo el límite máximo de la pensión a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes con el fin de evitar desigualdades e inequidades en el reconocimiento de las pensiones que, a su vez, puedan afectar la viabilidad del sistema.

Como quedó visto, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, adoptaron unas reglas con el propósito de evitar distorsiones en el monto de las pensiones que reconoce el régimen de prima media con prestación definida, así: i) una tasa de reemplazo para la pensión de vejez calculada con una fórmula decreciente en función del nivel de ingresos de cotización; ii) un incremento del monto de la pensión en función del número de semanas cotizadas, adicionales a las mínimas requeridas; iii) un monto máximo de la pensión de vejez, que no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación; iv) un límite a la base de cotización de 25 salarios mínimos legales, sin perjuicio del aumento hasta de 45 smlmv; y v) la prohibición de pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

De acuerdo a lo anterior, no existe duda alguna que el actor puede entrar a disfrutar de una tasa de reemplazo, pero del **78.3 %**, y no del **78.44%** como se dijo en la sentencia de primera instancia, lo que arroja una mesada pensional para el 2021 en la suma de \$15.993.998 y no de \$16.022.595 como se indicó en la mencionada providencia, por lo que deberá modificarse la misma en el siguiente sentido.

En virtud de lo anterior se MODIFICARÁ la sentencia de primera instancia en el sentido de DECLARAR que al señor MAURICIO JARAMILLO MERINO, le asiste el derecho al reajuste de la Pensión de Vejez reconocida mediante Resolución SUB-75494 del 16 de marzo de 2022, con una tasa de reemplazo del 78.3% del Ingreso Base de Liquidación determinado en dicha resolución, y no del 78.44% como se dijo en la sentencia de primera instancia y mucho menos del 70.50% como se dijo en la resolución de reconocimiento y se precisa que, en virtud de lo anterior la mesada pensional reconocida por Colpensiones debió ser de \$ 15.993.998 para el 2021 y no la reconocida en la mencionada resolución.

Por lo mencionado con anterioridad se CONDENA a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor MAURICIO JARAMILLO MERINO, la suma de \$46.170.369 por concepto del reajuste pensional liquidado entre el **22 de octubre de 2021 y el 31 de octubre de 2023**, precisando que a partir del 01 de noviembre de 2023 Colpensiones deberá seguir reconociendo al actor una mesada pensional en la suma de \$19.109.204 in perjuicio de los incrementos de ley y de los descuentos para salud. Lo anterior de conformidad con la siguiente tabla de liquidación:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2021	5,62%	\$ 14.400.726	\$ 15.993.998	\$ 1.593.272	3	\$ 5.257.798
2022	13,12%	\$ 15.210.047	\$ 16.892.861	\$ 1.682.814	13	\$ 21.876.581
2023		\$ 17.205.605	\$ 19.109.204	\$ 1.903.599	10	\$ 19.035.991
TOTAL						\$ 46.170.369

Así mismo se ADICIONARÁ la sentencia de primera instancia en el sentido de que se AUTORIZA a Colpensiones para que del retroactivo adeudado por concepto de reajuste pensional reconocido en la sentencia se realicen los descuentos destinados para el sistema general de seguridad social en salud.

2. De los intereses moratorios.

En cuanto a los intereses moratorios, tenemos que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 al regular la aplicación de los intereses moratorios, indica:

*“INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, **en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales** de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”* (Negrillas fuera del texto).

Partiendo de lo anterior debe advertirse que esta Sala era de la posición que los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 no eran procedentes cuando de reliquidaciones o reajustes se trata sino solo cuando se presentaba mora en el pago total de las mesadas pensionales, sin embargo dicha posición ha sido replanteada acogiendo los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia C 063 de 2023 donde se deja claro que dichos intereses si son procedentes para reajustes o reliquidaciones pensionales.

No obstante, lo anterior también debe tenerse en cuenta que la imposición de dichos intereses no procede de forma automática y en algunos casos tal y como lo ha reconocido la Sala de Casación Laboral, se presentan ciertas circunstancias en las cuales el incumplimiento del plazo legal para dar respuesta no da lugar al cobro de los intereses moratorios, tales como:

- (i) si las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer la pensión tienen justificación porque encuentran respaldo normativo, por ejemplo, cuando al momento de la solicitud de la prestación a la entidad administradora no se cumple con los requisitos para acceder a ella, pero aquellos son satisfechos en el transcurso del proceso judicial;
- (ii) cuando se presenta suspensión del trámite por controversia entre los beneficiarios de la prestación en los casos de pensión de sobreviviente;
- (iii) cuando se presenta un cambio jurisprudencial entre el momento de la decisión administrativa y en el que se adopta la decisión judicial;
- (iv) cuando se reconoce por inaplicación del principio de fidelidad y
- (v) “el reconocimiento del derecho se da con venere en una acción de tutela que emana en virtud de una interpretación del principio de la condición más beneficiosa, por vía jurisprudencial, que difiere de la línea de pensamiento de esta Sala”. También se consideraba una de tales circunstancias los casos de reliquidaciones y reajustes; sin embargo, en ello consistió el cambio de jurisprudencia que se cuestiona en sede de tutela.

Partiendo de lo anterior considera la Sala que si bien en reajustes o reliquidaciones es posible aplicar la sanción moratoria del artículo 141 de 1993 para el caso bajo estudio no habría lugar a imponer dicha sanción en la medida que el reajuste pretendido se concede con fundamento en el cambio jurisprudencial y en la interpretación que de ello se ha hecho respecto a la forma de aplicar la liquidaciones pensional en los términos del artículo 34 de la ley 100 de 1993 y la formula decreciente en el contenido cuando se superan las semanas mínimas exigidas por la ley y se tiene derecho al porcentaje por semanas adicionales, tanto es así que anteriormente esta Sala era de la posición de negar esta clase de reajustes.

Por lo anterior lo legal y pertinente será REVOCAR la sentencia de primera instancia que condenó a Colpensiones al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, y en su lugar SE CONDENA a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la indexación de las sumas reconocidas en la sentencia objeto de reajuste pensional desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta el momento en que se realice el pago total de la obligación.

Respecto al reproche en relación a la fijación del monto de las agencias en derecho en primera instancia indica la Sala que no es este el momento procesal oportuno para discutir dicha situación toda vez que según el numeral 05 del artículo 366 del C.G.P, “la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho **solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas**”, por lo anterior no se pronunciará la Sala en esta instancia sobre el monto fijado en primera instancia por concepto de agencias en derecho a Cargo de Colpensiones

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones en la suma de \$580.000.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de DECLARAR que al señor MAURICIO JARAMILLO MERINO, le asiste el derecho al reajuste de la Pensión de Vejez reconocida mediante Resolución SUB-75494 del 16 de marzo de 2022, con una tasa de reemplazo del **78.3%** del Ingreso Base de Liquidación determinado en dicha resolución, y no del 78.44% como se dijo en la sentencia de primera instancia y mucho menos del 70.50% como se dijo en la resolución de reconocimiento, y se precisa que, en virtud de lo anterior la mesada pensional reconocida por Colpensiones debió ser de \$ 15.993.998 para el 2021 y no la reconocida en la mencionada resolución.

SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor MAURICIO JARAMILLO MERINO, la suma de \$46.170.369 por concepto del reajuste pensional liquidado entre el **22 de octubre de 2021 y el 31 de octubre de 2023**, precisando que a partir del 01 de noviembre de 2023 Colpensiones deberá seguir reconociendo al actor una mesada pensional en la suma de \$19.109.204 in perjuicio de los incrementos de ley y de los descuentos para salud, según lo argumentado en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, que condenó a Colpensiones al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, y en su lugar SE CONDENAR a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la indexación de las sumas reconocidas en la sentencia objeto de reajuste pensional desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta el momento en que se realice el pago total de la obligación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín en el sentido de que se AUTORIZA a Colpensiones para que del retroactivo adeudado por concepto de reajuste pensional reconocido en la sentencia se realicen los descuentos destinados para el sistema general de seguridad social en salud. En todo lo demás se CONFIRMA la sentencia.

QUINTO: Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones en la suma de \$580.000.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: MAURICIO JARAMILLO MERINO
DEMANDADO	: COLPENSIONES.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-005-2022-00225-01
RADICADO INTERNO	: 289-23
DECISIÓN	: MODIFICA, CONDENA, REVOCA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 05 de diciembre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 05 de diciembre de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO